

Santiago, diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

En estos autos Rol CS N° 95.054-2020, juicio ordinario de indemnización de perjuicios, caratulados "VILLANUEVA CON FISCO DE CHILE", seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Talca, por sentencia de primera instancia se acogió la demanda y condenó al Fisco de Chile a pagar a cada uno de los padres de Luciano Villanueva Carrasco (Q.E.P.D), por concepto de reparación del daño moral, la suma de \$70.000.000 y la cantidad de \$30.000.000 a cada uno de los hermanos de aquel, más reajustes e intereses.

Apelada dicha sentencia por ambas partes, la Corte de Apelaciones de Talca la confirmó con declaración, reduciendo los montos de indemnización de perjuicios fijados al acoger la excepción de exposición imprudente al daño, regulando en definitiva la suma de \$35.000.000 en favor de cada padre y de \$20.000.000 para cada uno de los hermanos.

En contra de esta última decisión la parte demandante dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

**Considerando:**

**I-. En cuanto al recurso de casación en la forma.**

**Primero:** Que en el primer capítulo se acusa que el fallo impugnado incurre en la causal de casación prevista en el



artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el N°4 del artículo 170 del mismo Código, toda vez que elimina las consideraciones del tribunal de primera instancia que le permitían rechazar la excepción de exposición imprudente al daño y resuelve acogerla, sin expresar las razones de hecho que le sirven de fundamento.

Expresa que existe una sentencia penal condenatoria en contra del funcionario policial que causó la muerte de la víctima directa, por el delito de homicidio, de modo que tal como lo resolvió el tribunal de primer grado la excepción debía ser desechada, pues en sede penal incluso se desechó la eximente de legítima defensa. En este contexto refiere que hay una carencia absoluta de fundamentos en el fallo impugnado, pues no existe un argumento que pondere las distintas pruebas y que permita llegar a la calificación de la concurrencia de la excepción en cuestión.

**Segundo:** Que, en el siguiente acápite, se esgrime la causal de casación prevista en el artículo 768 N°6 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, puesto que los hechos fundantes de esta causa, fueron objeto de un procedimiento penal, que culminó con la condena del Sargento de Carabineros, Juan Marcelo Morales Cortés, por el delito de homicidio de Luciano Villanueva Carrasco. Sin embargo, el



fallo recurrido soslaya el efecto de cosa juzgada en sede civil de la sentencia condenatoria criminal, no siendo lícito tomar en consideración pruebas incompatibles con lo resuelto o con los hechos que le sirvan de fundamento.

En efecto, los sentenciadores eliminan los considerandos de la sentencia de primera instancia que ponderaba los hechos establecidos en la sentencia condenatoria penal y los desatienden, haciendo nuevas ponderaciones fácticas para arribar a la conclusión que corresponde aplicar la regla del artículo 2330 del Código Civil, a pesar que la sentencia penal establece que al momento de producirse el disparo había cesado cualquier agresión ilegítima de la víctima, descarta la eximente de responsabilidad de legítima defensa y también la atenuante, dividiendo la secuencia de hechos en dos etapas diferenciadas.

**Tercero:** Que, en relación al vicio que se imputa en el primer capítulo de casación en la forma, el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en su numeral 5° contempla como causal de casación en la forma el haber sido pronunciada la sentencia impugnada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 de dicho Código, norma que a su vez dispone que las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales,



cuyo es el caso, contendrán, en lo que atañe al presente recurso, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, y la enunciación de las leyes o principios de equidad que sirven de sustento a la decisión.

**Cuarto:** Que la relevancia de dar cumplimiento a lo previsto por la norma del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, ha sido acentuada por esta Corte Suprema a través de la dictación del Auto Acordado de fecha 30 de septiembre de 1920, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, y todo ello en aras de la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial.

**Quinto:** Que, para resolver acertadamente, se debe tener presente que en estos autos demandaron los padres y hermanos de Luciano Villanueva Carrasco, señalando que el día 9 de noviembre de 2014, cerca de las 21 horas., se constituyeron



tres efectivos policiales respondiendo al llamado por daños a la propiedad pública y privada, generándose un procedimiento policial que motivó que ingresaran al domicilio donde su hijo Luciano los repelió con un machete, encerrándose ambos hermanos en un dormitorio. Luego de producirse un forcejeo en la puerta, un funcionario extrajo arma y disparó, hiriendo a Luciano que estaba tras la puerta quien falleció. El funcionario policial que disparó fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral de Cauquenes por el delito de homicidio simple previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, razón por la que se deduce la presente acción reclamando la reparación del daño moral causado por un agente del Estado.

Al contestar, en lo que importa al recurso, el demandado, en subsidio de la solicitud de rechazo de la demanda, solicitó la aplicación del artículo 2330 del Código Civil, refiriendo que existió una exposición imprudente de la víctima al daño, toda vez que ésta, haciendo caso omiso a los requerimientos de la autoridad, le propinó golpes y usando un arma blanca tipo machete hirió varias veces al funcionario, amenazándolo de muerte, lo que determina un contexto de ejercicio de la fuerza por parte de Carabineros que no pudo ser imprevisible para la víctima.



**Sexto:** Que el fallo de primer grado estableció que el día 9 de noviembre de 2014 se produjo la muerte de Luciano Villanueva Carrasco en el contexto de una diligencia policial. Tales hechos dieron inicio a un proceso judicial en el cual se determinó la responsabilidad penal que le correspondía al Sargento Juan Marcelo Morales Cortés, siendo éste condenado, mediante sentencia ejecutoriada, por el delito de homicidio simple en la causa R.I.T. O-8-2017, a la pena de 5 años de presidio menor en grado máximo.

Sobre la base de los hechos asentados en el proceso penal, se establece la responsabilidad, toda vez que el referido fallo asienta que el día 9 de noviembre del año 2014, a las 21:00 horas aproximadamente, se llevó a cabo un procedimiento policial, siendo agredidos los Carabineros que acudieron por parte de los hermanos Villanueva Carrasco, quienes arrojaron piedras, primero desde la calle y luego desde el interior del domicilio ubicado en calle Estadio N°1062. Ante esta situación los funcionarios Gutiérrez, Morales y Anabalón ingresaron por una puerta lateral del costado norte del inmueble. Una vez en el interior del patio, el funcionario Gutiérrez fue repelido por Luciano Villanueva Carrasco, con una arma blanca tipo machete, de aproximadamente 80 centímetros de largo, ingresando éste último, junto a otros sujetos, a un dormitorio, cerrando la



puerta. Frente a ello, el funcionario nombrado en compañía de Morales Cortés, en diversas oportunidades, procedieron a intentar abrir la puerta siendo repelido por Villanueva Carrasco, con el arma blanca, ocasionándole a Morales Cortés tres lesiones superficiales en el antebrazo izquierdo, además de romperle parte del chaleco antibalas en la parte superior frontal.

En esta dinámica, frente a los empujones y golpes de pies, dados por los funcionarios de Carabineros, se rompió la chapa de la puerta, continuando un forcejeo por una parte Carabineros intentando abrirla, y Luciano Villanueva Carrasco por mantenerla cerrada; en dicho contexto y mientras la puerta se encontraba cerrada o a la sumo abierta unos 20 centímetros, el funcionario de Carabineros Juan Marcelo Morales Cortés, extrajo su arma de servicio y efectuó un disparó a la puerta a un altura de 1,22 metros, impactando a Luciano Darío Villanueva Carrasco, quien se encontraba tras ésta al interior de la habitación.

A consecuencia de lo anterior, Luciano Villanueva Carrasco recibió una herida que le causó la muerte.

La sentencia establece que los hechos asentados, son constitutivos del delito consumado de homicidio simple en la persona de Luciano Darío Villanueva Carrasco, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, por



cuanto el agente disparó con un arma de fuego provocándole a la víctima una herida que le provocó la muerte.

Para desechar la alegación de legítima defensa, refiere que, en la dinámica de los hechos, hubo en un momento anterior, por parte de Luciano Villanueva Carrasco, una agresión ilegítima, constituida por haber apedreado los vehículos policiales, y luego enfrentar a Morales Cortés con un machete provocándole lesiones en un brazo y daños en su chaleco protector. Sin embargo, en el momento que se produce el disparo la agresión ilegítima a que se ha hecho mención ya había cesado puesto que la víctima se encontraba al interior de la habitación, y detrás de una puerta cerrada o al menos con una pequeña apertura, lo que naturalmente no permitía realizar una conducta de agresión hacia los funcionarios policiales, sino, a lo sumo, una actuación tendiente a impedir el ingreso de éstos y finalmente su detención.

Así, el fallo impugnado establece que la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes, apreciada con arreglo a los artículos 178, 180 y 342 N° 2 y 3 del Código de Procedimiento Civil, convierten en hechos plenamente probados para la presente causa, por virtud de la eficacia heterogénea y refleja de la cosa juzgada penal en materia civil, los sucesos establecidos por los sentenciadores penales como fundamento de la condena, lo que





resultan acreditados e inamovibles para los efectos del presente juicio, los que son suficientes la ejecución de una acción ilícita por parte de una persona que tenía la calidad de agente policial del Estado, invocando y actuando en su condición de tal durante los sucesos de marras.

Añade que la falta personal cometida por parte del ex Sargento de Carabineros, Juan Marcelo Morales Cortés, es apta para generar la responsabilidad civil del Estado por los daños causados, por cuanto la acción lesiva ha tendido lugar con ocasión de la función pública que desempeñaba y en su calidad de funcionario de dicho cuerpo policial.

Se debe precisar que, en considerandos suprimidos por la sentencia de segundo grado, se exponía parte del fallo condenatorio penal que reflexionaba en torno a que la agresión que sufría el acusado, por parte de la víctima, más bien responde a un "desobedecer órdenes de la autoridad" por parte de un ciudadano, parapetado detrás de una puerta y respondía a la fuerza que ejercía los funcionarios policiales, en el intento de reducirlo que causar la muerte de manera directa. Que no se trataba de un ataque concertado por los sujetos al interior, a lo que se suma que el acusado se encontraba al menos apoyado por tres dispositivos policiales en torno al domicilio y lo que se estaba investigando era un delito de daños a propiedad privada como



bienes fiscales, existiendo en ese momento en el lugar seis funcionarios con vasta experiencia, puesto que la mayoría de ellos tenía más de 10 años de servicio en la institución, por lo que el uso de armas de fuego más bien obedece a un dolo eventual, que a una legítima defensa, donde existen otros medios más simples para obtener el mismo resultado como es resguardar el orden y seguridad pública.

Asimismo, se suprimieron considerandos en que el juez a quo reflexionaba respecto que los antecedentes reflejan que la conducta que reviste rasgos delictivos desde el punto de vista criminal, en lo concerniente a la responsabilidad civil, constituye, a lo menos, un cuasidelito si se le pone en relación con el resultado lesivo, toda vez que el agente, aun sin la intención positiva de causar el daño, obró negligentemente en el cumplimiento de una orden o en el ejercicio de sus funciones policiales, especialmente contempladas en la Circular 1756 de 13 de marzo de 2013 sobre el uso de la fuerza, inobservancia que trajo como consecuencia la muerte del ofendido. Así, refería, puede entenderse como una falta en la satisfacción del deber especial de cuidado que se imponía al condenado en razón de su profesión, obrando con un grado de diligencia inferior al estándar que le era exigible en su condición de funcionario público, ocasionando el resultado lesivo.



En el mismo sentido, se elimina la argumentación relativa a la consideración que la conducta desplegada por el funcionario policial no puede separarse del obrar de la institución pública a la que pertenece, toda vez que resulta ostensible que se desplegó en el ejercicio de sus funciones policiales.

Finalmente, en lo que interesa al recurso, el fallo en análisis, en considerandos eliminados, rechazaba la alegación respecto de que la víctima directa se habría expuesto imprudentemente a la producción del daño, para los efectos contemplados en el artículo 2330 del Código Civil, toda vez que con la sentencia penal quedó asentado en la sentencia la concurrencia de dos agresiones efectuadas por Luciano Villanueva a los funcionarios de Carabineros a cargo de la diligencia policial. La primera, al repeler al Sargento Cristián Gutiérrez con un machete de aproximadamente 80 centímetros de largo, cuando éste hace ingreso al domicilio ubicado en calle Estadio 1062, de la comuna de Parral. El segundo, luego que Villanueva y otros sujetos ingresaran a un dormitorio del inmueble referido, con el objetivo de repeler los intentos de los funcionarios Morales y Gutiérrez de abrir la puerta, provocándole al primero, con el arma ya referida, lesiones superficiales en el antebrazo izquierdo y el



rompimiento de su chaleco antibalas en la parte superior frontal.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe afirmar que es precisamente en el marco de esta clase de actividades y especialmente durante ellas, que los entes policiales y sus funcionarios deben dar cumplimiento cabal a las normas y límites que regulan el ejercicio de la fuerza pública, que es lo que razonablemente puede esperarse de dichos organismos, por lo que no es atendible el argumento sostenido por la defensa fiscal en cuanto a que Villanueva Carrasco, haya contribuido causalmente y con su propia culpa al empleo innecesario y desproporcionado de un arma de fuego en su contra, ocasionando su muerte.

Así, concluye que el fallo penal, establece en el considerando décimo tercero, que dada la dinámica de los hechos establecidos en el razonamiento décimo, al momento en que se produjo el disparo, la agresión ilegítima a que se hizo mención ya había cesado, puesto que la víctima directa se encontraba al interior de la habitación, detrás de una puerta cerrada o al menos con una pequeña apertura, situación de hecho que no permitía una agresión a los funcionarios policiales, sino a lo sumo, una actuación tendiente a impedir el ingreso de éstos. De lo señalado, es dable concluir que no existió por parte de la víctima directa exposición imprudente



al daño, desde que las faltas que pudo haber cometido no han tenido relación causal con su muerte, en atención a las circunstancias en que ésta se produjo.

Luego de dar por acreditado el daño, establece la indemnización de 70.000.000 a favor de los padres de la víctima directa y de 35.000.000 en favor de los hermanos de éste.

**Séptimo:** Que, en tanto, apelado que fuera dicho fallo, la Corte de Apelaciones lo confirmó con declaración, rebajando los montos de indemnización a la suma de 35.000.000 en favor de los padres y 20.000.000 en favor de los hermanos, al acoger la excepción de exposición imprudente al daño, refiriendo que "resulta claro que en las circunstancias que la jueza a quo tuvo por acreditadas, el agente policial mató a una persona mientras desarrollaba su labor -por lo cual fue condenado penalmente- y es evidente que ese hecho, el de la muerte, causó profundo daño moral a los progenitores y a los hermanos de la víctima, lo que no es sólo una apreciación innegable apoyada en la naturaleza humana acorde con lo sucedido -la muerte más la relación parental- sino también refrendada con las probanzas que dan cuenta de ello, que el tribunal de origen pondera y que en su mérito se han tenido por reproducidas".



Continúa refiriendo "Que, sin embargo, no se comparte la conclusión relativa a la falta de exposición imprudente al daño desechada en primera instancia -cuyas argumentaciones fueron ahora eliminadas- toda vez que aparece nítido que los disparos se produjeron en el desarrollo de una pesquisa policial, luego de una repetida resistencia a la acción policial, de la víctima y otras personas, en un procedimiento de alto riesgo, por lo que corresponde dar aplicación a la regla del artículo 2330 del Código Civil, optándose por la reducción prudencial que lleva a regular las indemnizaciones en las sumas que se indican", estableciendo en lo resolutivo la reducción de las sumas a las que se ha hecho referencia.

**Octavo:** Que, como se observa, el fallo recurrido, efectivamente, incurre en los vicios de nulidad formal que se le atribuyen.

En efecto, la sentencia incurre en el vicio de nulidad del artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil en relación al 170 del mismo cuerpo legal, toda vez que procede a eliminar razonamientos contenidos en el fallo apelado, proceso en el cual suprime no sólo fundamentos propios del tribunal a quo, sino que, además, elimina considerandos que contenían la exposición del fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes en la causa RIT N° O-8-2017, que le servían de base al razonamiento del juez de primer



grado. Empero, luego de tal eliminación, no provee al fallo de razonamientos propios que permitan comprender lo expresado en lo resolutivo en relación a la disminución del monto de indemnización, pues se limita a señalar una breve conclusión que da cuenta que, en términos genéricos, en el procedimiento policial existió una agresión por parte de la víctima directa al agente policial que fue finalmente condenado.

Es indudable que el razonamiento expuesto no cumple con el estándar de fundamentación que es exigible, puesto que la sentencia, en los términos expuesto, carece de fundamentos fácticos o jurídicos que le sirvan de sustento a la decisión de acoger la alegación de exposición imprudente al daño en los términos del artículo 2330 del Código Civil, pues se limita a exponer una conclusión que hace abstracción de la prueba rendida en autos, muy especialmente de la sentencia penal cuyos razonamientos expuestos en la sentencia impugnada son eliminados, cuestión que carece de lógica procesal, toda vez que este fallo, que se encuentra firme, produce efecto de cosa juzgada, razón por la que, más allá de lo erróneo de su eliminación, lo relevante es que el mismo, estando o no expuesto en la sentencia, obliga al sentenciador a ponderarlo, cuestión que fue omitida por los sentenciadores, quienes no se hacen cargo de los efectos que produce esa sentencia criminal en la presente causa civil, cuestión que



determina que se incurra, además, en el vicio de casación previsto en el artículo 768 N° 6 del Código de Enjuiciamiento Civil.

**Noveno:** Que, en efecto, si bien es importante recalcar que en materia criminal y en materia civil la actividad jurisdiccional está encaminada a comprobar responsabilidades de carácter absolutamente distinto, toda vez que en la primera se busca sancionar una conducta delictiva, siendo el legislador más estricto en el ámbito de su determinación, razón por la cual el acto debe coincidir estrictamente con un tipo penal descrito en la ley, exigencia que se justifica tanto por el efecto que tiene la conducta en el quebrantamiento del orden social como por la naturaleza de la sanción que este tipo de responsabilidad trae aparejada, la que es de carácter punitivo. En cambio, en la segunda se busca determinar si la conducta antijurídica ha causado daño a la persona o propiedad de otro y una vez establecido esto, nace la obligación de reparar el daño causado a través de una indemnización de carácter pecuniario, lo relevante es que nuestro legislador previó expresamente el efecto que tienen una sentencia penal condenatoria en sede civil.

Así, el artículo 178 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que las sentencias condenatorias en materia criminal producirán efecto de cosa juzgada en los juicios civiles,





determinan que es natural por cuanto no puede el juez en un proceso de tal carácter señalar que determinada conducta no es ilícita si se ha declarado que ella constituye un delito penal; en consecuencia, en este caso, la actividad estará encaminada a determinar en el juicio civil si concurre el resto de los elementos de la responsabilidad, especialmente el relacionado con la prueba del daño, puesto que no se puede olvidar que desde la perspectiva penal no se necesita su existencia para configurar la conducta típica. Ahora bien, es relevante señalar que los hechos que se tienen por acreditados en sede penal, que forman parte de la descripción del hecho típico constitutivo del delito, no pueden ser alterados en sede civil, por lo que se tiene acreditados con el sólo mérito de la sentencia, sin que puedan ser objeto de prueba que pretenda desvirtuarlos, toda vez que el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil dispone: "Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en el juicio civil, no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento".

Como se observa, esta norma precisa el alcance del mencionado efecto que la sentencia penal produce en sede civil, estableciendo que en un juicio civil no es lícito



valorar pruebas incompatibles con lo resuelto en causa criminal, razón por la que el juez debe estar a los hechos asentados en el juicio criminal al momento de dictar la sentencia en sede civil.

**Décimo:** Que, en el caso concreto, efectivamente la sentencia de segundo grado desconoce los hechos fijados en la sentencia penal, que sirvieron de base a la condena y rechazo de la alegación de legítima defensa y de legítima defensa incompleta, toda vez que, tal como lo sostiene el recurrente, el fallo dictado en sede criminal distingue, en relación a la dinámica de los hechos, dos etapas bien diferenciadas. En la primera, describe la agresión de parte de Luciano Villanueva Carrasco a los Carabineros, quien pretendió repeler la acción policial azuzando un machete. Acción que termina cuando los hermanos Villanueva se parapetan al interior de la habitación de su domicilio, pues luego de un forcejeo, cesa la acción de agresión, y es en este momento, cuando la puerta se encontraba entreabierta, que el funcionario policial dispara, sabiendo que la víctima se encontraba al otro lado, recibiendo éste el disparo que resultó ser mortal.

Es así como el fallo recurrido, para establecer la exposición imprudente al daño, hace completa abstracción de la dinámica de los hechos asentada en sede criminal, pues en su conclusión da cuenta en forma genérica de hechos



coetáneos: agresión de la víctima al Carabinero-disparo de parte del Carabinero, cuestión que fue descartada por el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes, que refirió que existió una línea temporal que los separa y que justifica el reproche penal, pues cesada la agresión, el funcionario que contaba con refuerzos policiales no solo en el interior del inmueble sino que también en las afueras, teniendo todos ellos una vasta experiencia profesional, decide disparar hiriendo de muerte a Luciano Villanueva Carrasco.

**Undécimo:** Que, como se aprecia, el fallo incurre en los vicios denunciados toda vez que no contiene argumento alguno que explique o justifique la aplicación del artículo 2330 del Código Civil ante la existencia de una sentencia penal dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes en los autos RIT O-8-2017 que establece hechos que son discordantes con aquellos que expresa para acoger la alegación fiscal, de modo que incurre en el vicio del artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 número 4° del mismo cuerpo de leyes, tal como se ha explicado en el motivo que precede, sin perjuicio que, además, incurre en el vicio de nulidad formal previsto en N° 6 de la primera norma antes señalada, al desconocer el efecto de Cosa Juzgada que emana de la referida sentencia, razones por las que el



presente recurso de casación en la forma debe también ser acogido.

Por estos fundamentos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 764, 765, 766, 768, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, **se acoge** el recurso de casación en la forma interpuesto por la parte demandante, en contra la sentencia de diecisiete de julio de dos mil veinte, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación y en forma separada, sin nueva vista.

Téngase por no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido por el primer otrosí.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., y el Abogado Integrante Sr. Pedro Pierry A. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra señora Sandoval por haber cesado en sus funciones y la Ministra señora Ravanales por estar con feriado legal.

Rol N° 95.054-2020.





En Santiago, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

